RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 02401/INFOEM/IP/RR/2025

[A N T E C E D E N T E S 2](#_Toc195188163)

[I. Presentación de la solicitud de información 2](#_Toc195188164)

[II. Respuesta del Sujeto Obligado 3](#_Toc195188165)

[IV. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto 4](#_Toc195188166)

[C O N S I D E R A N D O S 7](#_Toc195188167)

[PRIMERO. Competencia 7](#_Toc195188168)

[SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento 7](#_Toc195188169)

[TERCERO. Determinación de la Controversia 9](#_Toc195188170)

[CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública 11](#_Toc195188171)

[QUINTO. Estudio de Fondo 12](#_Toc195188172)

[SEXTO. Decisión 29](#_Toc195188173)

[R E S U E L V E 30](#_Toc195188174)

Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de fecha veintitrés de abril de dos mil veinticinco.

**VISTO** el expediente electrónico conformado con motivo del Recurso de Revisión **02401/INFOEM/IP/RR/2025**, interpuesto por XXXXXXXXXXXXX, en lo sucesivo la persona Recurrente o Particular, en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, **Ayuntamiento de Toluca,** a la solicitud de acceso a la información pública00555/TOLUCA/IP/2025, se emite la presente Resolución, con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

# A N T E C E D E N T E S

## I. Presentación de la solicitud de información

El veintinueve de enero de dos mil veinticinco, el Particular presentó una solicitud de acceso a la información, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), ante el Ayuntamiento de Toluca, mediante la cual se requirió lo siguiente:

***“DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.***

*El. Examen y resultado de los exámenes presentados para jueves cívicos y mediadoras del año 2024” (Sic)*

***“Modalidad de Entrega***

*A través del SAIMEX”.*

## II. Respuesta del Sujeto Obligado

El veinte de febrero de dos mil veinticinco, el Ayuntamiento de Toluca, notificó la respuesta a la solicitud, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), por medio de un escrito de la misma fecha, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido al Solicitante, por medio del cual se menciona lo siguiente:

*“...se hace de su conocimiento que la* ***Secretaría del Ayuntamiento y Servidor Público Habilitado,*** *informó que se procedió a realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos que obran en la Secretaría del Ayuntamiento, en este sentido y de acuerdo a las facultades, competencias y funciones, se hace del conocimiento que no se cuenta con expresión documental que de por atendida la pretensión del C. Solicitante, en razón de no haberse generado poseído o administrado…” (Sic)*

**III. Interposición del Recurso de Revisión**

El cuatro de marzo de dos mil veinticinco, se recibió en este Instituto, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), **(ya que si bien se presentó el tres de dicho mes y año, este fue inhábil, por lo que se tuvo por admitida el día hábil siguiente)** el Recurso de Revisión interpuesto por la parte Recurrente, en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:

***“ACTO IMPUGNADO***

*Los requisitos habalan de un examen y contesta el municipio que no cuentan con el” (Sic)*

***“RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD***

*Niega la información que debe tener en su poder se pide se entregue en saimex” (Sic)*

## IV. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto

**a) Turno del Medio de Impugnación.** El tres de marzo de dos mil veinticinco, el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), asignó el número de expediente **02401/INFOEM/IP/RR/2024**, al Medio de Impugnación que nos ocupa, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Órgano Garante y lo turnó al **Comisionado Ponente Luis Gustavo Parra Noriega**, para los efectos del artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**b) Admisión del Recurso de Revisión.** El siete de marzo de dos mil veinticinco, se acordó la admisión del Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente en contra del Sujeto Obligado, en términos del artículo 185, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual fue debidamente notificado a las partes el mismo día, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en el que se les otorgó un plazo de siete días hábiles posteriores a la misma, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y formularan alegatos.

**c) Informe Justificado.** En diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, el Sujeto Obligado a través del SAIMEX, presentó en el apartado de Informe Justificado, a través de la digitalización de un escrito de la misma fecha, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido al Comisionado Ponente, por medio del cual ratifica su respuesta.

**d) Vista al Informe Justificado.** El veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, se notificó a través del SAIMEX, el acuerdo mediante el cual se puso a la vista del Particular el Informe Justificado, proveído por el cual se le otorgó a este último, un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, a fin de emitir las manifestaciones que conforme a sus intereses convinieran.

**e) Alcance al Informe Justificado.** El veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, el Sujeto Obligado a través del SAIMEX, presentó en el apartado de diligencias el Alcance al Informe Justificado, a través de la digitalización de los siguientes documentos:

i) Escrito del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido al Comisionado Ponente, por medio del cual se menciona lo siguiente:

*“…con la finalidad de otorgar al solicitante la información requerida, la Secretaría del Ayuntamiento y en conjunto con la Consejería Jurídica informan:*

*Que se entrega el listado de los resultados obtenidos por cada uno de las personas seleccionadas, y que hoy en día ocupan el cargo de jueces y facilitadores.*

*Cabe mencionar que por cuanto hace a la totalidad de los exámenes y resultados del resto de participantes, que no fueron seleccionadas de acuerdo a las bases de la convocatoria, es información clasificada como confidencial ya que en nada abona a la transparencia como tampoco percibieron recursos públicos.*

*Por lo antes expuesto, atentamente se solicita al Pleno del INFOEM:*

*1. Tener por presentado en tiempo y forma el informe justificado, en mi calidad de Servidor Público Habilitado, tal como refiere la Ley de Transparencia del Estado de México y Municipios.*

*2. Se modifique la respuesta emitida.*

*…” (Sic)*

ii) Formato de examen aplicado a los aspirantes para ocupar el cargo de juezas, jueces cívicos y facilitadores para el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México.

**f) Vista al Alance del Informe Justificado.** El ocho de abril de dos mil veinticinco, se notificó a través del SAIMEX, el acuerdo mediante el cual se puso a la vista del Particular el Alcance al Informe Justificado, proveído por el cual se le otorgó a este último, un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, a fin de emitir las manifestaciones que conforme a sus intereses convinieran.

**g) Cierre de instrucción.** El veintiuno de abril de dos mil veinticinco, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar los expedientes a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 185, fracciones VI y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que fue notificado a las partes el mismo día, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

En razón de que fue debidamente sustanciado e integrado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a los siguientes:

# C O N S I D E R A N D O S

## PRIMERO. Competencia

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los 5°, párrafos trigésimo séptimo, trigésimo octavo y trigésimo noveno, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 56 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento

De las constancias que forma parte del Recurso de Revisión que se analiza, se advierte que previo al estudio del fondo de la *litis*, es necesario estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que en Derecho proceda.

**Causales de improcedencia**

Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente (acorde con el Criterio orientador en la Tesis de Jurisprudencia “IMPROCEDENCIA.” (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 1985, pág. 262), el cual establece que debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, sea que las partes lo soliciten o no, por ser una cuestión de orden público; de tal suerte, deberá ser desechado cualquier Recurso de Revisión que actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por ser improcedente.

En el presente caso, **no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia** establecidas en el ordenamiento jurídico previamente señalado, toda vez que: este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por la Recurrente ante otra instancia; no existió prevención alguna; la veracidad de la respuesta no formó parte del agravio; ni se realizó una consulta o ampliación a los alcances del requerimiento informativo.

Conforme a lo anterior, se actualiza la causal de procedencia señalada en el artículo 179, fracción III, de la Ley de la materia, toda vez que el Solicitante se inconformó con la declaración de inexistencia de la información.

**Causales de sobreseimiento**

Por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.

Sobre el tema, el artículo 192 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala las causales por las cuales se puede sobreseer en todo o en parte, el Recurso de Revisión; así, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza algún supuesto de sobreseimiento; lo anterior, en virtud de que no hay constancias en el expediente en que se actúa, de que la Recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, sobreviniera alguna causal de improcedencia, que el Sujeto Obligado hubiese modificado o revocado el acto impugnado o bien, haya quedado sin materia.

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto.

## TERCERO. Determinación de la Controversia

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada, resulta conveniente precisar que, una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el Particular requirió el examen y los resultados obtenidos para ocupar los jueces cívicos y mediadores, en el año dos mil veinticuatro.

En respuesta, el Sujeto Obligado, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, señalo que, después de realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos que obran en la Secretaría y de acuerdo a las facultades, competencias y funciones, se hace del conocimiento que no se cuenta con expresión documental que dé cuenta de lo solicitado; ante dicha circunstancia, el Particular se inconformó con la declaración de inexistencia de la información, lo cual, actualiza la causal de procedencia prevista en la fracción III, del artículo 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Así, las cosas, una vez admitido y notificado el Recurso de Revisión, a las partes notificado a las partes, el Sujeto Obligado ratifico su respuesta.

Posteriormente, el Sujeto Obligado a través de un Alcance al informe justificado señaló que se entregaba el listado de los resultados obtenidos por cada uno de las personas seleccionadas, y que hoy en día ocupan el cargo de jueces y facilitadores, sin remitirlo. Asimismo, refirió que por cuanto hace a la totalidad de los exámenes y resultados del resto de participantes, que no fueron seleccionadas de acuerdo a las bases de la convocatoria, es información clasificada como confidencial ya que en nada abona a la transparencia como tampoco percibieron recursos públicos; además, anexó el formato de examen aplicado a las y los aspirantes para ocupar el cargo de juezas, jueces cívicos y facilitadores para el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México.

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente de referencia, materia de la presente resolución, consistente en: la solicitud de acceso a la información, el escrito recursal y el informe justificado; instrumentales que se toman en cuenta a efecto de resolver el presente medio de impugnación, conforme a lo dispuesto por el artículo 185, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

## CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública

El artículo 6°, Apartado A), fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.

En materia local, el artículo 5°, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es coincidente con la Constitución Federal, en el sentido de la publicidad de toda la información, con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Local), establece lo siguiente:

El artículo 12, que, quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma.

El artículo 18, que, los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.

El artículo 19, que, se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.

## QUINTO. Estudio de Fondo

Expuestas las posturas de las partes, se procede al análisis del agravio hecho valer por el Recurrente, concerniente a la declaración de inexistencia de información, sin embargo, para realizar dicha acción, en principio es necesario contextualizar la solicitud de información.

En ese contexto, el artículo 1º de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios establece que es de observancia obligatoria en el Estado de México promover el acceso a la Justicia Cívica y regular su funcionamiento en los municipios, así como fomentar en los municipios la implementación y substanciación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

En ese orden de ideas, el artículo 3º de la Ley en comento señala que el Estado y sus municipios, en el ámbito de su competencia, velarán por el reconocimiento y acceso integral a los mecanismos de Justicia Cívica, a efecto de favorecer la convivencia armónica y pacífica entre sus habitantes; por su parte el artículo 4º define lo siguiente:

* **Jueza o Juez Cívico:** A la autoridad administrativa encargada de conocer y resolver sobre la imposición de sanciones que deriven de las conductas que constituyan infracciones administrativas.
* **Justicia Cívica:** Al conjunto de procedimientos orientados a fomentar la cultura cívica y de la legalidad a fin de dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos cotidianos, que tiene como objetivo facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
* **Mediación:** Al proceso confidencial y voluntario en el que un tercero, denominado **Facilitador,** de forma neutral e imparcial, interviene facilitando a los interesados la comunicación, con objeto de que ellos construyan un convenio que dé solución plena, legal y satisfactoria al conflicto.

En ese orden de ideas, el artículo 9º de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios refiere que dentro de las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentra el emitir la convocatoria respectiva para la selección de las personas integrantes de los Juzgados Cívicos, los cuales contaran con el personal mínimo siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley en cita:

1. Una Jueza o Juez Cívico;
2. Una Secretaria o Secretario Cívico;
3. Una persona Facilitadora;
4. Una persona médica;
5. Una o un psicólogo;
6. Las y los policías de custodia que se requieran para el desahogo de las funciones del Juzgado Cívico; y
7. El personal administrativo que el Ayuntamiento asigne a cada Juzgado Cívico

En relación con los requisitos para fungir como Jueza o Juez Cívico y Facilitador en un Juzgado Cívico se deben cumplir con los siguientes requisitos de conformidad con los artículos 16 y 20 de la Ley de la materia:

**Jueza o Juez Cívico**

* Ser ciudadana o ciudadano de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
* Tener por lo menos veintiocho años de edad cumplidos al momento de su designación; tener título de licenciatura en derecho, contar con cédula profesional expedida por la autoridad correspondiente para el ejercicio de su profesión y tener por lo menos tres años de ejercicio profesional;
* No estar condenado por sentencia ejecutoriada delito doloso que merezca pena corporal;
* No estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Entidad; y
* **Acreditar los exámenes, cursos o certificaciones correspondientes** que determine el Ayuntamiento.

**Facilitador**

* Ser ciudadana o ciudadano de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
* Tener veinticinco años de edad al día de su designación en el Juzgado Cívico;
* Ser licenciado en derecho, medios alternos de solución de conflictos, psicología, sociología, antropología, trabajo social, en comunicaciones, o carrera afín, contar con cédula profesional expedida por la autoridad correspondiente para el ejercicio de su profesión y tener, al menos, un año de experiencia profesional;
* No estar condenado por sentencia ejecutoriada delito doloso que merezca pena corporal; V. Estar certificado por el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México; y
* **Acreditar los exámenes de actualización, cursos o certificaciones correspondientes** a su función determinados por el Ayuntamiento.

En esa misma consecución de ideas, el artículo 10.20 del Código Reglamentario del Ayuntamiento de Toluca, establece que para la selección de las y los Jueces Cívicos, las y los Secretarios Cívicos, el Ayuntamiento publicará la convocatoria abierta y pública, en la que se establecerá como mínimo, los requisitos establecidos en la Ley, posteriormente la o el Presidente Municipal, contando con el resultado, por orden de prelación, seleccionará y propondrá ante el Cabildo a las y los candidatos para su designación y nombramiento.

En ese contexto, el artículo 10.9 establece que dentro de las atribuciones de las o los Secretarios Cívicos, se encuentra **el fungir como mediador en los mecanismos alternativos de solución de controversias,** en los casos que las y los Jueces Cívicos le asignen.

Conforme a lo anterior, se logra advertir que la pretensión del ahora Recurrente, es obtener el examen utilizado y el resultado obtenido de los participantes a ocupar los cargos de Jueces Cívicos y Facilitadores, en el año dos mil veinticuatro.

Establecido lo anterior, es de hacer mención que de las constancias que obran en el expediente se advierte que el Sujeto Obligado turno el requerimiento de información a la **Secretaría del Ayuntamiento,** por lo que, es necesario hacer referencia, al procedimiento de búsqueda que deben de seguir los Sujetos Obligados para localizar la información, el cual se encuentra previsto en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual establece que las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes de acceso a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla - de acuerdo a las facultades, competencias y funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida.

Así, a efecto de verificar que el Sujeto Obligado cumplió con dicho procedimiento, es necesario traer a colación el artículo 92, fracción I, del Bando Municipal del Ayuntamiento de Toluca dos mil veinticinco, el cual señala que la Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de una Secretaria o Secretario, quien tendrá como principales funciones auxiliar a la Presidenta o Presidente Municipal, formular el proyecto de orden del día de las sesiones de cabildo, **así como emitir las convocatorias,** asistir y levantar las actas correspondientes, elaborar los informes mensuales y trimestrales de las comisiones edilicias y fomentar la participación ciudadana en apoyo de los programas sociales municipales.

Así y de lo plasmado en párrafos anteriores, se logra colegir que el Sujeto Obligado cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez, que turnó el requerimiento de información a las áreas competente de conocer la información; por lo que, se procede analizar la respuesta entregada.

Expuestas las posturas de las partes, se procede al análisis del agravio hecho valer por el Recurrente, concerniente a la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, para lo cual, en principio es necesario contextualizar la solicitud de información.

Ahora bien,en respuesta como en informe justificado la Secretaría del Ayuntamiento, señaló que, después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos que obran en la Secretaría, no se cuenta con la expresión documental que da cuenta de lo solicitado en razón de no haberse generado poseído o administrado; sobre el tema, el Criterio Orientador SO/014/2017, emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de México y Municipios, el cual se encontraba vigente a la fecha de la solicitud, establece que la inexistencia de la información, es una cuestión de hecho que se le atribuye a la misma, cuando ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado.

En ese orden de ideas, según Trujillo, Humberto (2019), en el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (p. 171), la inexistencia de la información, es cuando la información requerida no se encuentra en los archivos públicos, reservados o clasificados, de los sujetos obligados.

Conforme a lo anterior, la **inexistencia** presupone la competencia del sujeto obligado para conocer de la información, pero por alguna circunstancia, la documentación solicitada no obra en sus archivos; sin embargo, para poder acreditar dicha circunstancia, se considera que los Sujetos Obligados, **primero deben realizar una indagación en todos los archivos de las áreas con funciones para conocer de lo peticionado.**

En ese sentido, según Jarquín, Soledad (2019), en el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (p. 68), **la búsqueda exhaustiva** es la obligación del área administrativa del Sujeto Obligado que cuenta o puede contar con la información requerida, la cual consiste en localizar toda aquella que atienda la solicitud, **hasta agotar por completo las posibilidades de indagación.**

Además, para poder acreditar el carácter exhaustivo de la búsqueda realizada por los Sujetos Obligados, se deben motivar las razones por las que se buscó la información en determinadas áreas, **los criterios de búsqueda utilizados y demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.**

En ese contexto, de conformidad con los criterios con clave de control SO/012/2010 y SO/004/2019, emitidos por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, vigentes a la fecha de la solicitud, se colige que los sujetos obligados para acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable, deben de proporcionar los elementos suficientes del carácter exhaustivo de la indagación realizada, a saber, los siguientes:

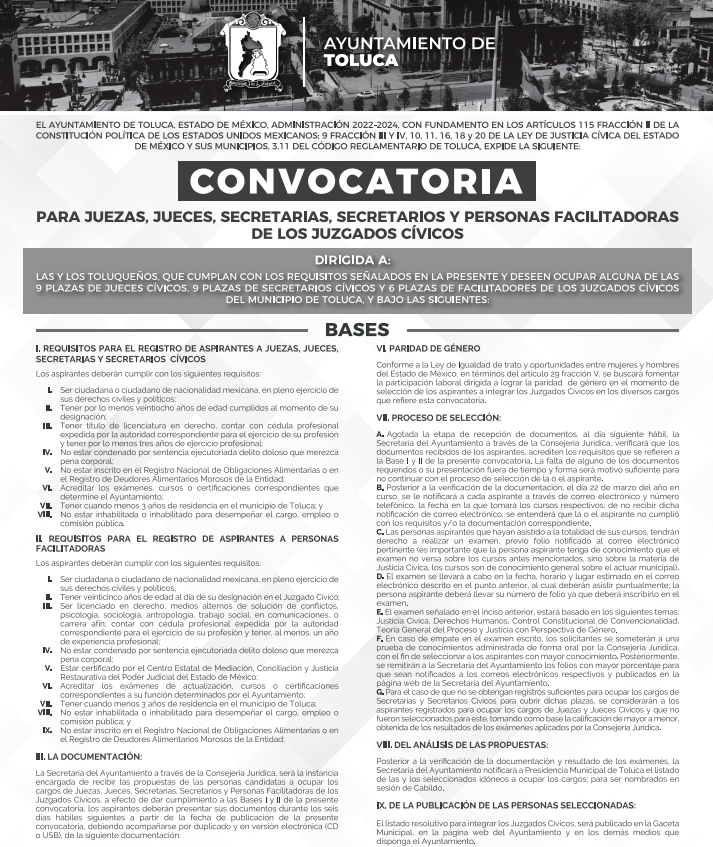
* Motivación por las que se buscó la información, en determinadas unidades administrativas;
* Los criterios de búsqueda utilizados, y
* Las circunstancias que fueron tomadas en cuenta.

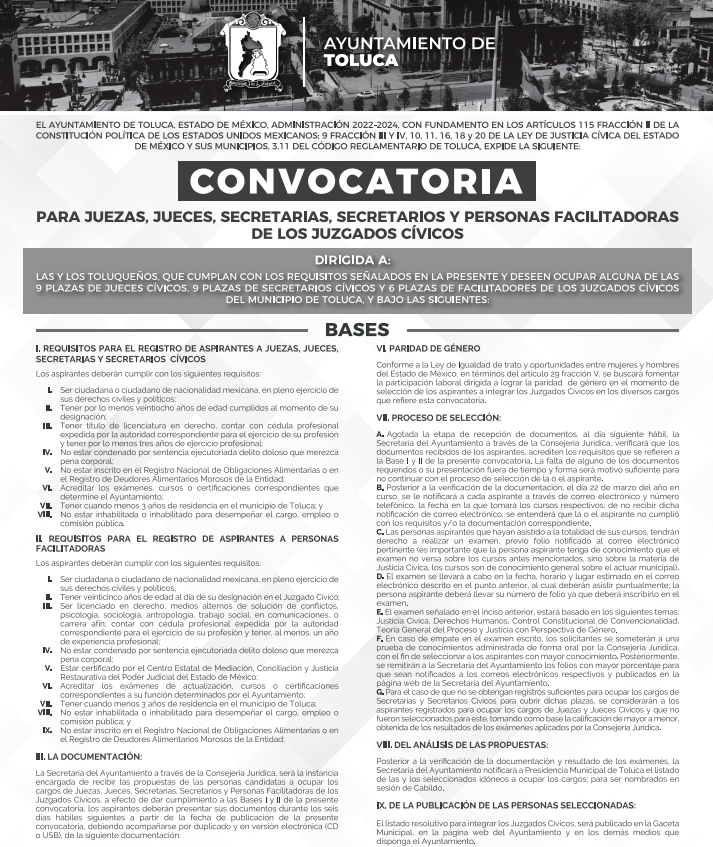
De tales circunstancias, se considera que para que los Sujetos Obligado justifiquen que realizaron una búsqueda exhaustiva y razonable, deben indicar de manera clara, lo siguiente:

1. Las áreas donde se buscó la información;
2. Tipo de archivos buscados (físicos o electrónicos);
3. Los criterios de búsqueda utilizados, y
4. Las circunstancias que fueron tomadas en cuenta.

Así y en atención al análisis realizado en párrafos anteriores, se logra vislumbrar que el Sujeto Obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda, pues si bien turno el requerimiento al área competente para conocer de lo solicitado, fue omiso en indicar los lugares buscó la documentación, ni los criterios de búsqueda utilizados.

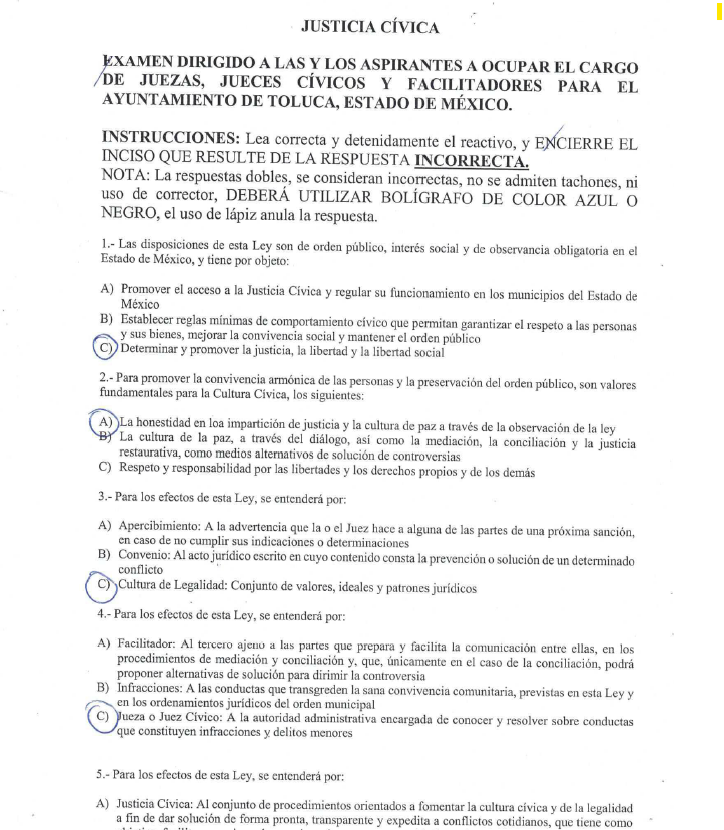
Lo cual toma relevancia, pues este Instituto localizó la Convocatoria para Juezas, Jueces, Secretarias, Secretarios y personas Facilitadoras del Ayuntamiento de Toluca, la cual estuvo vigente del cuatro al once de marzo de dos mil veinticuatro, en la cual se señala que la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Consejería Jurídica es la instancia encargada de recibir las propuestas de las personas candidatas, las cuales deberán presentar un examen, tal como se muestra a continuación:





Conforme a lo anterior, se logra vislumbrar que el Sujeto Obligado no acreditó los criterios de búsqueda previamente establecido, pues no indicó en qué lugares buscó la documentación, ni los criterios de búsqueda utilizados, pues como se advirtió el Sujeto Obligado realizó una convocatoria para los aspirantes para ocupar los cargos de Jueces y Facilitadores, los cuales presentaron un examen de conformidad con las bases establecidas en la convocatoria, lo cual da como resultado que el agravio sea **FUNDADO.**

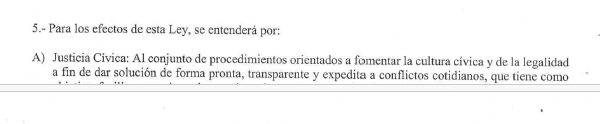
No obstante, durante la sustanciación del Recurso de Revisión, el Sujeto Obligado a través de la presentación de un alcance al Informe Justificado, proporcionó el formato general del examen aplicado a los aspirantes para ocupar los cargos de juezas, jueces y facilitadores para el Ayuntamiento de Toluca, tal como se muestra a continuación:

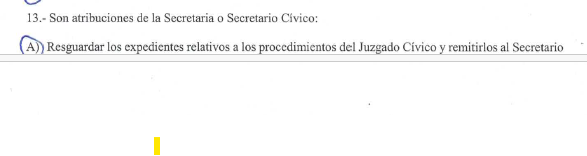


En ese contexto, de la revisión de dicho documento, se logra vislumbrar que, con dicho formato, los participantes realizaron su evaluación, al ser de opción múltiple, por lo que, es el documento que da cuenta del examen utilizado para elegir a las personas como Jueces Cívicos o Facilitadores, es decir, aquel que da cuenta de lo peticionado; dicha determinación toma relevancia, pues conforme al artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los sujetos obligados sólo están constreñidos a proporcionar la información pública que obre en sus archivos, en el estado en que esta se encuentre; por lo que, la entrega no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del Solicitante, además, que tampoco deberá generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.

De esta manera, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en el que conste la información solicitada, sin necesidad de elaborar documentos *ad hoc*, situación que toma sustento, toma sustento en el artículo 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual refiere que los sujetos obligados únicamente deberán entregar la información que obre en sus archivos.

De tales circunstancias, se concluye que los sujetos obligados únicamente se encuentran constreñidos a proporcionar los documentos que den cuenta de la información solicitada, como obren en sus archivos, sin tener que elaborarlos a las necesidades del Recurrente; lo cual aconteció pues proporcionó el formato del examen utilizado para ocupar el cargo de Jueces y Facilitadores Cívicos, sin embargo, de su análisis, se logra vislumbrar que se encuentra cortado, es decir, esta incompleto, tal como se muestra en los siguientes ejemplos:





Por lo que, para atender el requerimiento de información, el Sujeto Obligado deberá entregar examen proporcionado, de manera completa, para que el Particular pueda conocer todo el contenido del examen proporcionado.

Ahora bien, en relación con los resultados para ocupar los cargos de Juezas, Jueces y Facilitadores para el Ayuntamiento de Toluca, el Sujeto Obligado señaló que entregaba un listado de resultados obtenidos por cada una de las personas seleccionadas, y que hoy ocupaban el cargo de jueces y facilitadores, el cual no fue proporcionado.

Sobre el tema, el artículo 1.8, fracción IX, del Código Administrativo del Estado de México, establece que para que un acto administrativo tenga validez, deberá guardar congruencia con lo solicitado, lo cual no aconteció, pues si bien señaló que entregaba el listado con los resultados de las personas que ocupan los cargos, omitió anexarlos.

Así, para atender al requerimiento en análisis y cumplir con los artículos 12 y 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el Sujeto Obligado deberá proporcionar el listado referido, pues este contiene los resultados de aquellas personas que ocupan el cargo de Jueces Cívicos y Facilitadores; lo anterior, toma relevancia, pues esta información permite verificar que los seleccionados para ocupar los puestos, fueron los que obtuvieron mejor puntaje en el examen realizado.

Finalmente, por cuanto hace a los resultados de los exámenes de aquellos aspirantes que no fueron seleccionados para ocupar los cargos referidos, como se señaló en párrafos que anteceden el Sujeto Obligado refirió que constituían información **clasificada como confidencial**; por lo que, se procede analizar dicha circunstancia.

Sobre el tema, el artículo 143, fracción I, de la Ley previamente citada, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable son confidenciales.

Asimismo, en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:

1. Se trate de datos personales o información privada; esto es, información concerniente a una persona física o jurídico colectiva y que esta sea identificada o identificable.
2. Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3°, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación el diverso 4°, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se advierte que son datos personales, la información concerniente a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable (cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico), establecida en cualquier formato o modalidad. Bajo ese contexto, se analizará si los resultados de los participantes que no ocuparon los cargos analizados debe ser público o privado.

Al respecto, el resultado o calificación de los exámenes de las personas que no ocuparon cargos públicos, da cuenta del grado de conocimientos adquiridos, en una materia (justicia cívica), que únicamente corresponde a cuestiones relacionadas con el ámbito privado de los participantes, que no fueron seleccionados para ser Jueces Cívicos o Facilitadores, pues al no volverse servidores públicos, no tendrían que acreditar ante la ciudadanía información alguna.

En ese contexto, se trae a colación la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, de mayo de 2008, página 229, de la Novena Época, materia constitucional, que prevé la garantía de seguridad jurídica de los individuos a no ser molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, y cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En atención con lo anterior, se considera que el resultado obtenido por los participantes que no obtuvieron el cargo, es información íntima de estos, pues corresponde a su desempeño en la evaluación, lo cual únicamente atañe a estos, al no ser electos, por lo que se considera que es un dato confidencial, pues únicamente concierne a la vida íntima de este y forma parte de su vida privada de los mencionados.

Al respecto cabe señalar lo previsto en la tesis aislada número 1a. CCXIV/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, de diciembre de 2009, página 277, de la Novena Época, materia constitucional, que establece lo siguiente:

*“****DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA.*** *La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo ‘privado’. Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural.* ***Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-.*** *A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento.* ***En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás****, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.”*

De conformidad con lo señalado, se colige que **las actividades que realicen los particulares, dentro del ámbito privado, o dentro de la esfera particular, es información que debe protegerse.**

Conforme a lo anterior y lo expuesto, se advierte que el resultado de los participantes que no obtuvieron un cargo público, es información íntima de estos, lo cual concierne también a su vida privada, dado que no fueron seleccionados para ocupar los puestos; por lo cual, se considera que son confidenciales, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En ese contexto, el artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que precisa que en caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información requerida deban ser clasificados, el área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive dicha situación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

* Confirmar la clasificación;
* Modificar la clasificación y, otorgar total o parcialmente el acceso a la información, o
* Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

Para motivar la confirmación de la clasificación de la información, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento; lo cual no aconteció, por lo que, el Sujeto Obligado deberá entregar el Acuerdo emitido por el Comité de Transparencia, donde confirme la clasificación de los resultados obtenidos por los participantes que no fueron seleccionados.

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que el listado de los resultado de los Jueces y Facilitadores, pudieran contener datos o información clasificada; por lo que, en el supuesto, deberá elaborar la versión pública respectiva; al respecto, conforme al artículo 3°, fracción XLV, relacionado con el 137, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuando un documento contenga información pública y clasificada, la Unidad de Transparencia para efectos de atender al requerimiento informativo, deberá elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

## SEXTO. Decisión

Con fundamento en el artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente **REVOCAR** la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Toluca, a efecto de que proporcione la información de manera completa.

**Términos de la Resolución para conocimiento del Particular**

Se le hace del conocimiento al Particular, que, en el presente caso, no se le concede la razón pues el Sujeto Obligado fue omiso en proporcionar la información solicitada, por lo que, deberá en su caso, entregar en versión pública la misma. Finalmente, la labor del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es apoyar a la población a acceder a la información pública y garantizar la protección de sus datos personales.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

# R E S U E L V E

**PRIMERO.** Se **REVOCA** la respuesta entregada por el Sujeto Obligado a la solicitud de información00555/TOLUCA/IP/2025 por resultar **FUNDADAS** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Particular, en términos de los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al Ente Recurrido, a efecto de que entregue, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), lo siguiente:

1. El examen utilizado para ocupar el cargo de Juezas, Jueces Cívicos y Facilitadores para el Ayuntamiento de Toluca, proporcionado en el alcance al Informe justificado de manera completa.
2. En su caso, en versión pública, el listado de los resultados obtenidos por los aspirantes seleccionados para ocupar los cargos de Jueces Cívicos y Facilitadores, referido en el alcance al Informe Justificado.
3. El acuerdo del de Clasificación donde el Comité de Transparencia, confirme la clasificación de los resultados obtenidos por los aspirantes que no fueron seleccionados para ocupar los cargos de Jueces Cívicos y Facilitadores, derivado de la convocatoria emitida en el dos mil veinticuatro; así como, en su caso, los datos testados en el listado referido en el numeral 2, de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII y 132, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186, último párrafo, 189, segundo párrafo, y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III, 214, 215 y 216 de la Ley referida.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**CUARTO. NOTIFÍQUESE** **POR SAIMEX** al Recurrente la presente Resolución, asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR **UNANIMIDAD** DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.